

Progreso, desigualdad y escándalo moral

Axel Kaiser

Hay en el corazón humano un gusto depravado por la igualdad que lleva a los débiles a querer rebajar a los fuertes a su nivel y que conduce a los hombres a preferir la igualdad en la servidumbre a la desigualdad en la libertad.

ALEXIS DE TOCQUEVILLE

La desigualdad es «el desafío decisivo de nuestro tiempo» dijo Barack Obama en un discurso el año 2013. Como todos los partidarios de la igualdad material, Obama afirmó que es inmoral y peligroso tener una sociedad donde haya algunos que viven mucho mejor que otros y que, por tanto, el Estado debe redistribuir riqueza. Diversos líderes del mundo político han replicado esta idea siendo Pablo Iglesias el más dramático al afirmar que «la desigualdad es lo que rompe España». Para esta mentalidad la desigualdad es inmoral por definición y una sociedad igualitaria siempre será mejor que una sociedad desigual. Así de simple. La postura igualitaria parece razonable y ética, pero ¿lo es? En primer lugar, cabe preguntarse si acaso es cierto que una sociedad más igualitaria es siempre preferible o más moral que una con mayor desigualdad. ¿Es mejor éticamente una sociedad donde todos sean igualmente pobres a una sociedad donde todos sean desigualmente ricos y a nadie le falte nada? O, para plantearlo de modo menos extremo, ¿es superior una sociedad con mayor igualdad y menor calidad de vida que una con más desigualdad y mayor calidad de vida de la población? Evidentemente pocos prefieren una sociedad donde todos están peor a una donde todos estamos mejor sólo porque la primera sea más igualitaria. Y si eso es así entonces la igualdad no puede ser un bien moral superior. Existen países africanos con mayores niveles de igualdad que Estados Unidos, por ejemplo, y pocos dirían que esas sociedades sean más morales o mejores que la norteamericana porque son más iguales. La igualdad material no es un fin deseable por sí mismo como cree Obama y la izquierda y parte de la derecha occidental, si lo fuera, entonces sería mejor una sociedad igual donde todos están peor que una sociedad desigual más rica donde todos están mejor. El reclamo por igualdad confunde a la gente porque, en realidad, es un reclamo por riqueza. Evidentemente todos quieren ser iguales al que tiene más, nadie quiere ser igual al que tiene menos. Si la gente en las clases medias y populares apoya las propuestas redistributivas igualitarias no es porque crea en la igualdad como un valor en sí, sino porque cree que su situación particular mejorará al obtener nuevas regalías que el político le dará. Ningún político prometerá la igualdad a las masas diciéndoles que las va a nivelar hacia quienes están más abajo. Lo que promete es que las va a nivelar hacia arriba sacándole dinero a los más ricos. Si bien a nivel político el discurso igualitario es rentable, pues promete más beneficios a las personas y explota la envidia recurriendo al odio de clases, lo cierto es que individualmente la gente no quiere ser igual al resto. Ésta es una verdad fundamental que destruye por completo la doctrina igualitarista: las personas prefieren la desigualdad porque quieren diferenciarse del resto. Todo el mundo desea que su hijo sea el líder, su hija la más linda, la más inteligente y así sucesivamente. La búsqueda de la superación está en

la esencia del ser humano. Ningún padre o madre le dice a su hijo de diez años que regresó de un partido de fútbol que jugó «igual que el resto». Lo que hace es decirle que estuvo genial y destacar así las cualidades que lo distinguen de otros. Del mismo modo, tan pronto pueden, las personas se cambian a mejores barrios, se inscriben en clubes privados o compran marcas que muestran estatus. Incluso un sociólogo de izquierda como François Dubet reconocería que al final somos las personas las que «preferimos la desigualdad», y que eso se debe a razones mucho más complejas que culpar a un sistema económico determinado como suelen hacer los socialistas. Dubet, a pesar de ser de izquierdas, reconoce el hecho esencial de que la igualdad no es lo que la gente busca en ningún nivel social. Según el francés, «todos los que pueden —y que no son necesariamente los más ricos— quieren desarrollar un capital social endógeno, vivir en los mismos barrios... por el ambiente, la seguridad y la estética urbana, sin hablar de la sectorización escolar. Los individuos no buscan las desigualdades, pero sus decisiones la engendran». Tal vez Dubet tiene razón cuando dice que los individuos no buscan por definición la desigualdad incluso al diferenciarnos de otros, pero no hay duda de que buscamos el progreso independientemente de cómo estará el resto. Nadie que puede irse a un mejor barrio se queda en un mal barrio para ser «igual» a los de ese barrio. La razón para ello, como ha mostrado el profesor de Harvard, Steven Pinker, un experto en psicología evolutiva, es que forma parte de la naturaleza humana el darle prioridad al interés personal y al de la propia familia por encima del de los demás. Así es como nuestro cerebro ha evolucionado. Ello explicaría, por ejemplo, el hecho de que los padres prefieran gastar su dinero en cosas para el agrado de sus hijos —bicicletas, viajes, educación, autos, etc.— que ahorrarla para salvar la vida de otros niños desconocidos que mueren de hambre en África. Como veremos más adelante, nada de esto significa que no podamos ser solidarios ni tener empatía con quienes son desafortunados. El punto es que en nuestra naturaleza no está el buscar la igualdad con otros, sino nuestra prosperidad y la de nuestros cercanos. La desigualdad material es, por lo tanto, esencialmente un resultado inevitable de nuestra naturaleza más profunda. Pero, además, los seres humanos, si bien somos iguales en el sentido general de cómo nuestro cerebro está estructurado siendo capaces del mismo tipo de emociones y motivaciones, somos todos distintos a un nivel personal: tenemos diversas preferencias, valoraciones, hábitos, costumbres, inteligencias, aspecto físico, aptitudes y ADN, entre muchos otros factores. Si se permite que actuemos con libertad, esa diversidad se expresará de muchas formas que van desde la manera de vestirnos y actuar hasta nuestros ingresos. Es por lo mismo absurdo pretender igualdad de resultados cuando la naturaleza nos ha hecho a todos tan desiguales y nuestro entorno, experiencias y cultura refuerzan esa diversidad. Tan fuerte es el poder diferenciador en nuestra especie que incluso entre hermanos las diferencias suelen ser gigantescas. Esto es algo que debiera celebrarse y no condenarse. La gracia de la diversidad humana es precisamente que produce personas distintas, es decir, desiguales. Para tratar de igualarnos tendríamos necesariamente que recurrir a la violencia sistemática para suprimir la manifestación de las diferencias que nos caracterizan. Esto es lo que buscó el socialismo y por eso condujo inevitablemente a regímenes totalitarios donde todos vivían en la miseria, salvo los líderes del Partido que vivían como príncipes mientras hablaban de la igualdad. El igualitarismo material es profundamente inmoral porque para intentar alcanzarse debe basarse en el uso de la violencia sobre las personas, prohibiéndoles ser lo que son o beneficiarse del ejercicio de su libertad. Si usted quisiera igualar a todos los jugadores de fútbol para que no haya un Messi, tendría que prohibirle al genio argentino jugar como juega o bien quitarle lo que gana para repartirlo de manera igualitaria entre todos los jugadores de fútbol, con lo cual le impide beneficiarse del ejercicio de su libertad, lo

que es lo mismo que arrebatarle su libertad. Pero, además, como es obvio, si se aplicara esa política redistributiva los Messi de este mundo en las diversas áreas dejarían de existir, pues no tendrían incentivo alguno para desplegar sus talentos. Eso es lo que el socialismo logró sin excepciones donde se practicó. Es importante recalcar aquí que no hace ninguna diferencia en este punto el hecho de que se quiera lograr igualdad de oportunidades, pues ésta no puede distinguirse de la igualdad de resultados. Los padres, como hemos visto, naturalmente transfieren a sus hijos todas las ventajas que están a su alcance y, por tanto, si pueden darle mejor educación que otros lo harán. La única manera de evitar que padres con más ingresos benefician a sus hijos con una mejor educación que los demás sería obligándolos a todos a mandarlos a escuelas estatales igualitarias como era en la Unión Soviética o Cuba, y además prohibirles que les enseñen fuera de la escuela. Es cierto que en Europa los países ricos, en general, tienen sistemas de educación estatal de calidad, aunque también han ido empeorando, y con las olas migratorias se están produciendo desigualdades antes inexistentes que estos sistemas no pueden resolver. Pero en ellos también existen padres muy adinerados que envían a sus hijos a internados privados que les dan, en muchos casos, ventajas que otros no tienen. El punto en todo caso es que si queremos igualdad de oportunidades ni siquiera sería suficiente obligar a todos a ir a los mismos colegios. Imagine unos padres que hablan dos idiomas y desde pequeños a sus hijos les hablan en ambos. Ya ese solo hecho da una enorme ventaja a esos niños por sobre los de aquellos padres que no hablan otro idioma. ¿Cómo garantizaría igualdad de oportunidades ahí? Pues la única forma sería interviniendo la familia con un agente estatal. Además, hay padres mucho más preocupados que otros, que dan más afecto que otros, que alimentan mejor a sus hijos que otros, que les inculcan hábitos más sanos y productivos, etcétera. Es imposible intentar igualar todo eso sin caer en un régimen totalitario. Lo que se puede y debe hacer ciertamente es ayudar a los que están peor para que estén mejor, pero eso no es buscar igualdad sino el progreso de aquellos rezagados sin importar qué tan bien le esté yendo a los demás. Esta diferencia es esencial, pues no es lo mismo querer que todos estén igual a que todos estén mejor. Lo primero se logra con la fuerza estatal que suprime la libertad, lo segundo requiere de la libertad para generar prosperidad y de apoyos específicos del Estado que pueden o no resultar en mayor igualdad. Pero los igualitaristas insisten que no importa que todos progreseemos porque si se mantienen las diferencias de ingresos y oportunidades hay injusticia. Aquí entramos nuevamente en el problema de la desigualdad relativa que tanto molesta a socialistas, socialcristianos y otros. Ya analizamos que desde el punto de vista moral no tiene sentido decir que la igualdad es buena por definición. Este punto quedará más claro con un ejercicio teórico que muestra la relación entre progreso, desigualdad y calidad de vida. Asumamos por un minuto que la idea según la cual la desigualdad es inmoral por definición es correcta. Si ello es así, entonces, como sociedad debemos hacer todo lo posible por castigar a los creadores de desigualdad y, no sólo eso, debemos condenarlos públicamente como inmorales por crear una sociedad más injusta. Para tener claro quiénes son esos despreciables personajes, debemos primero entender cómo surge la desigualdad en un orden de mercado. Imagine usted un pueblo muy pobre pero muy igual, sin antibióticos, sin celulares ni computadores, sin agua potable, sin electricidad, ni comodidades. En otras palabras, imagine una sociedad como aquella en las que vivían nuestros antepasados. Esta sociedad, desde un punto de vista igualitario, es perfectamente moral, pues no hay grandes diferencias de ingresos, oportunidades o calidad de vida. Suponga por un momento que un hombre del pueblo, angustiado por la falta de alimentos para su familia, tiene la genial idea de inventar un invernadero. Al poco rato esa familia tendrá más alimento que las demás y, por cierto, más oportunidades de sobrevivir.

Desde el punto de vista de la ética igualitaria, esta sociedad es ahora más inmoral que antes, pues se ha creado una desigualdad que no existía. Desigualdad que no sólo beneficiará al que inventó el invernadero, sino también a sus hijos, quienes no tienen ningún mérito por el ingenio de su padre y, por tanto, según ciertos igualitaristas, no merecen ese alimento más que otros niños que no tuvieron la suerte de tener un padre tan creativo. Ahora bien, como los seres humanos no son meros espectadores de buenas ideas, después de un tiempo muchos comenzarán a copiar la nueva tecnología, generando un incremento en la calidad de vida de sus familias. Esto ocurrirá hasta que se generalice el uso de invernaderos y todo el mundo esté mejor. Pero el problema para el igualitarista está lejos de terminar. A poco andar, a otro habitante se le ocurre inventar una medicina para una peste que mataba a mucha gente. Como al principio la capacidad de producción de la medicina es limitada, sólo unos pocos podrán acceder a ella, creando una enorme desigualdad en materia de oportunidades para sobrevivir. Esto sería, desde un punto de vista igualitario, intolerable, pues antes había una sociedad donde todos tenían las mismas oportunidades en materia de salud y ahora hay una donde unos pocos se diferencian radicalmente de otros. Si por algún milagro los inventores de la medicina sobreviven a la persecución de los justicieros igualitarios, ocurrirá con ella lo que con el invernadero: tras el paso del tiempo, la nueva medicina se masificará y todos tendrán acceso a ella. En pocas palabras, habrá progreso universal e igualdad en términos de calidad de vida. Ésa es la historia del sistema de mercado. Tome el ejemplo de los celulares. Hace quince años sólo gente muy rica podía tener uno y era de muy baja calidad. Hoy cualquiera tiene uno más barato y de mejor calidad que el que tenía el habitante más rico del mundo hace una década. La lista de cosas que han seguido esa lógica es infinita. El premio Nobel de economía del año 2015, Angus Deaton, un experto en estudios sobre desigualdad ha dejado claro este punto. Refiriéndose a innovaciones que aumentan la salud, por ejemplo, dice que «cuando surgen nuevas invenciones o nuevo conocimiento alguien tiene que ser el primero en beneficiarse, y las desigualdades asociadas a la espera por un tiempo son un precio razonable que hay que pagar». Según Deaton sería «absurdo» que, por evitar que unos pocos se benefician al principio generando desigualdad, condenemos a todo el mundo a una mala salud sólo por asegurar igualdad. Esta lógica, afirma el profesor escocés, se aplica a todo lo demás: primero unos pocos se benefician habiendo desigualdad y después el invento se masifica mejorando a todos. El igualitarista dogmático no ve esta parte y pretende lograr una igualdad impuesta desde el Estado que, finalmente, sólo detiene el progreso de los más pobres sin siquiera lograr necesariamente la igualdad que busca. La inmoralidad del igualitarismo es entonces doble: por un lado, atenta contra la libertad y la diversidad humana que son valores esenciales, y por otro condena a los que pretende ayudar a menores niveles de progreso.

La ficción del interés general

Aunque teóricamente es posible igualar hacia arriba incrementando la riqueza como hace el mercado, en la práctica política igualar necesariamente implica nivelar hacia abajo, es decir, redistribuir la riqueza. ¿Cómo igualaríamos a Bill Gates con el resto de la humanidad si no es quitándole lo que tiene? Es la única forma porque los recursos no dan para que todos tengan lo mismo que el magnate norteamericano, y políticamente es más fácil quitarle a un rico que generar condiciones para que mejore un pobre. Ahora bien, esta visión es la que propone el igualitarista, porque como vimos lo que le importa no es que todos estén mejor, sino que todos estén igual. Retomemos un caso sensible para ilustrar las implicaciones de esta visión: la salud. Sólo existe una

cierta cantidad de tratamientos completos para enfermedades catastróficas, por ejemplo. Por desgracia, no son infinitos los recursos, lo cual significa que, si hay más personas con una enfermedad grave que recursos disponibles alguien tendrá que decidir quién recibe el tratamiento y quién no, como siempre en los hospitales estatales. Los recursos son finitos y no existe magia que permita multiplicarlos indefinidamente. Frente a esa realidad, la idea igualitarista implicaría que es mejor que nadie se salve a que se salven sólo algunos, pues ésa sería una desigualdad injusta. Como es obvio, esta alternativa igualitaria es de lejos la más inmoral. Más inmoral aún si se entiende que el aumento de recursos en una sociedad, también para la salud, está estrechamente vinculado con los incentivos para crearlos y con la capacidad de gasto que tienen quienes están en la cima de la pirámide económica. Son ellos, como sugiere Deaton, quienes pueden pagar por remedios y tratamientos nuevos y caros que después se masifican bajando sustancialmente de precio haciéndose accesibles para la mayoría. Esto no significa, por supuesto, que no deba haber planes de salud para personas sin recursos. El punto es que siempre hay y habrá, en todos los países, personas que pueden acceder a medios mientras otros no, lo cual cuenta tanto para la salud como para cualquier otra cosa y eso es fundamental para que la producción se masifique.

Los igualitaristas, en general, no toman en serio el problema de la escasez de recursos cayendo en una sensiblería superficial que en nada mejora la situación de aquellos en estado de necesidad. Lo importante para ellos, como hemos dicho, es que, al menos en áreas sensibles como educación y salud, nadie tenga más que otro, lo cual sólo puede conseguirse con la eliminación del mercado, es decir, de la libertad de elegir de las personas en esas áreas. De ese modo, a través del intervencionismo estatal, sostienen, se va a conseguir de verdad el «interés general» que no puede existir si cada uno persigue su interés individual en el mercado. No deja de ser interesante notar que, para la mentalidad socialista y derechista, la comunidad y el «interés general» se construyen fundamentalmente desde el Estado y no desde la sociedad civil. Son los políticos y burócratas obligando al ciudadano a ir a hospitales y colegios estatales los que de ese modo velan por el místico «bien común». El interés individual, dicen ellos, lo define cada persona por sí misma, mientras el general puede entrar en conflicto con el anterior porque se refiere a toda la sociedad y, por tanto, debe ser perseguido desde el Estado. ¿Le parece esto coherente desde un punto de vista lógico? ¿Existe algo así como un interés general? ¿Y si lo hay, quién lo define? Digamos de partida que «la sociedad» no existe de manera independiente de los individuos que la componen, es decir, no hay algo así como una «sociedad» en abstracto. «La sociedad» ni tiene inteligencia, ni actúa, ni tiene emociones porque no es un ente aparte de las personas. Max Weber, padre de la sociología moderna explicaría, refutando las visiones sociológicas holistas y colectivistas, lo siguiente: «Para fines sociológicos no existe algo así como una personalidad colectiva que actúa. Cuando se hace referencia en el contexto sociológico a un Estado, nación, o corporación [...] o colectividades similares, lo referido [...] es sólo cierto tipo de desarrollo de acciones sociales actuales o posibles de personas individuales». Si Weber tiene razón, entonces «la sociedad» no puede tener intereses distintos a los de sus miembros y el «interés general» debe necesariamente coincidir con lo que interesa a cada uno de los integrantes de la sociedad. Y si eso es así, se llega necesariamente a entender el «bien común» o «interés general» como las condiciones que permiten a cada persona perseguir, libremente y sin dañar a terceros, sus propios fines. Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos y redactor de la declaración de independencia de ese país, expresaría esta idea de manera insuperable cuando sostuvo que «el bien común -public good- se promueve de la mejor manera por el esfuerzo de cada individuo buscando su propio bien a su propio modo». El «interés

general» se garantiza, así, con la protección de los derechos individuales —vida, libertad y propiedad— de todos los miembros de la comunidad que es lo que permite a cada uno perseguir sus fines y servir a la comunidad.

No es que la sociedad no exista, por supuesto. Lo que ocurre es que ésta no es una entidad aparte de los individuos que la componen ni tiene un interés distinto al de ellos, como creen la izquierda y cierta derecha conservadora siguiendo una antigua tradición colectivista. La sociedad es un evento que surge de los intercambios e interacciones permanentes de los distintos individuos y los grupos que éstos conforman. En consecuencia, donde no hay libertad de actuar e interactuar no puede haber sociedad ni resguardarse el «interés social» pues éste precisamente se satisface y emerge de la interacción libre de las personas. A los delincuentes, por ejemplo, los llamamos «antisociales» precisamente porque no aceptan las reglas del juego que nos permiten interactuar y perseguir nuestros fines libremente y sin dañar a otros. Poniendo un ejemplo muy sencillo podemos decir que la sociedad es un proceso de interacción libre bajo ciertas reglas, así como un partido de fútbol es un proceso de interacción entre los jugadores, quienes tienen plena libertad de actuar dentro de ciertas reglas del juego. Si se les prohíbe actuar entonces desaparece el juego y sólo quedarán veintidós personas quietas en una cancha. Del mismo modo, mientras el poder político imponga más restricciones a la actuación de los individuos, más se debilita el proceso dinámico que constituye la esencia de la sociedad. Por esa razón, la idea de un «interés general» independiente, e incluso en oposición a los intereses particulares de cada individuo, no es más que una ficción. Y si entendemos que es una ficción, no queda otra alternativa que la de un Estado limitado que se restrinja a proteger los derechos individuales, lo que permite el juego espontáneo del cual depende la sociedad, así como la sanción de las faltas en el fútbol permite que se desarrolle el partido. Si en cambio creemos lo contrario, es decir, que se puede proteger el interés de todos los individuos juntos mediante la limitación del interés de todos por separado, las puertas se abren para un intervencionismo estatal ilimitado y para la concentración, también ilimitada, del poder en manos de la autoridad. Sería como el árbitro diciéndole a cada jugador cómo debe jugar, qué goles puede marcar y a quién debe darle los pases.

Esta idea de un «interés general» opuesto al interés individual, que los igualitaristas defienden, no es algo novedoso. El filósofo francés nacido en Ginebra, Jean-Jacques Rousseau, un precursor del marxismo, del nazismo y de los totalitarismos colectivistas del siglo XX, inventó una fórmula muy parecida a la del «interés general» en su famoso libro *El contrato social*. En esa obra, Rousseau argumentó que existía algo llamado la «voluntad general» del pueblo, la que se encarnaba en el Estado y que era distinta a la voluntad separada de cada persona que integraba ese mismo pueblo. Según Rousseau, puesto que «la voluntad general» al mismo tiempo comprendía la voluntad y el interés de todos los integrantes del pueblo, ésta era infalible: «La voluntad general está siempre en lo correcto y tiende a la ventaja del público», dijo. Es, por supuesto, la clase gobernante la que interpreta esa «voluntad general» por lo que para Rousseau era la autoridad la realmente infalible. A fin de cuentas, quién si no quienes controlan el poder van a ser los que representen y encarnen esa abstracta «voluntad general» o el «interés general». Por lo mismo, dijo Rousseau, no hay necesidad alguna de limitar el poder del Estado, ya que la autoridad siempre sabe lo que es mejor para el pueblo y siempre actúa en su beneficio, pues en cierto sentido la autoridad es el pueblo. En consecuencia, si a usted lo obligan a hacer algo por la fuerza, si lo encarcelan o torturan por alguna

razón que los gobernantes estiman justificada, se está actuando en su propio bien y el del pueblo, pues usted es parte de la «voluntad general» que la autoridad infaliblemente encarna.

Las implicaciones totalitarias de esta visión son evidentes. El filósofo Isaiah Berlin, uno de los pensadores más relevantes del siglo XX, analizando la doctrina de Rousseau, afirmó que para Rousseau «la libertad es idéntica a la autoridad y es posible tener libertad personal mediante el control completo por parte de la autoridad». Así, «mientras más obedezcas más libertad y más control». Rousseau, continúa Berlin, cae en un misticismo letal para la libertad al pensar que existe algo como la «voluntad general» encarnada en el Estado que sabe mejor que los individuos cuál es su bien y su interés. Y es letal porque, como supuestamente la autoridad sabe mejor que ellos qué es lo que les conviene, entonces puede obligarlos por la fuerza a ser «libres» ya que la libertad implica racionalmente hacer lo que sería mejor para uno. Berlin aclara que fue esta doctrina la que sirvió de justificación para Robespierre y sus crímenes durante la sangrienta Revolución francesa, para Hitler, Mussolini y los comunistas en general. La doctrina de Rousseau según la cual la libertad de las personas se consume en el Estado, dice Berlin, fue la de la «servidumbre absoluta». Por ello, para el profesor de Oxford, Rousseau es uno de los «más siniestros y formidables enemigos de la libertad en toda la historia del pensamiento moderno».

No cabe duda de que la mayor parte de la izquierda socialista no busca un régimen totalitario. Pero tampoco era eso lo que buscaba Rousseau. El problema es que la doctrina que separa al individuo de su voluntad y de su interés pretendiendo que existe una autoridad que sabe mejor que él cuál es su interés y que, por tanto, puede imponérselo desde el Estado, contiene los gérmenes del autoritarismo y del totalitarismo. Se trata de un misticismo, como dice Berlin, que justifica el uso de la violencia por los que controlan el Estado sobre los ciudadanos, bajo el pretexto de servir a los mismos que somete por la fuerza. Tomemos un caso concreto donde se aplica la lógica rousseauiana: la educación. Básicamente, el modelo planteado por los socialistas en el mundo prohíbe que los padres elijan lo que estiman mejor para sus hijos y gasten su dinero de acuerdo con eso, asignando ese rol al Estado. Que el Estado, es decir, la autoridad le prohíba a usted decidir sobre la educación de sus hijos es claramente incompatible con cualquier idea básica de libertad y es lo que han hecho todos los regímenes totalitarios de la historia.

Aparte de la afirmación de que ello crea «desigualdad de oportunidades», el argumento que se da para que el Estado controle toda la educación es que los padres son incapaces de saber realmente qué es lo mejor para sus hijos y, por lo tanto, los burócratas e intelectuales que controlan el Estado deben imponerles por su propio bien el tipo de educación y el colegio al que deben mandar a sus niños. Este desprecio elitista de los socialistas por los más pobres y por la misma clase media, que afirma defender, es ciertamente todo lo contrario a lo que piensan los liberales desde Smith en adelante. Como recordará el profesor Samuel Fleischacker: «En el contexto del siglo XVIII Smith presenta una imagen notablemente dignificada de los pobres, una imagen en que éstos toman opciones tan respetables como aquellas de sus "superiores", donde en realidad no hay "inferiores" o superiores». Para buena parte de la izquierda, en cambio, la solución es que el Estado, esa figura semidivina que sabe mejor que el resto lo que le conviene, arrebatase a los padres «incapaces» la libertad de elegir. Así, esta doctrina rousseauiana que separa el interés general de los intereses individuales acrecienta el poder de los gobernantes sobre la vida de las personas, justificándose en que a mayor control sobre ellas mejor para éstas pues más libres serán después gracias a la sabia decisión que la autoridad les impuso. Por cierto, el Estado no tiene porqué detenerse en la

educación. La lógica del argumento lleva a una expansión ilimitada del poder estatal, pues lo mismo podría decirse en materia de alimentación, vivienda, vestuario, etcétera. ¿Acaso la gente no se deja seducir en todos esos casos por la publicidad tomando decisiones que muchas veces no son óptimas para ellos? ¿Por qué detenerse en la educación si creemos que el Estado, como encarnación del «interés general» debe cumplir el rol de resguardar a la gente de su propia estupidez? La verdad, sin embargo, es que no solamente son los burócratas y políticos, en general, mucho más incompetentes que los mismos ciudadanos para resolver los problemas que éstos tienen, sino que además hay un tema de principios involucrado. Pues supongamos que, efectivamente, usted no sabe lo que le conviene, ¿acaso no corresponde a su libertad y responsabilidad tomar las decisiones que le afectan a usted y a su familia? Aun si fuéramos gobernados por ángeles de nobles intenciones que siempre conocen nuestro bien mejor que nosotros, ¿estaríamos dispuestos a aceptar que nos impongan todos los días cómo debemos vivir nuestras vidas? Claramente no y esto es lo que los estatistas olvidan. La gente desea preservar su libertad, aunque pague costes por ejercerla porque es parte integral de su dignidad.